

¡Hacemos el trabajo que no hace el Estado!: Cuidar, organizar y resistir en tiempos de nuevas derechas y crisis de reproducción

Pamela Veñy¹

Fecha de recepción: 12/03/26

Resumen: El artículo analiza la crisis de reproducción social en la Argentina actual, marcada por el ajuste, la represión y el debilitamiento del campo popular. Propone el concepto de asistencialización de los sujetos colectivos para describir el desplazamiento desde la acción política hacia la gestión de la supervivencia, y reflexiona sobre el rol del Trabajo Social en la reconstrucción de horizontes emancipatorios.

Palabras clave: Crisis de reproducción social – sujetos colectivos – nuevas derechas – cuidado – Trabajo Social – proyecto ético-político.

Abstract: This article analyzes the crisis of social reproduction in contemporary Argentina, marked by austerity measures, repression, and the weakening of the popular movement. It proposes the concept of the welfare dependency of collective subjects to describe the shift from political action to the management of survival, and reflects on the role of social work in the reconstruction of emancipatory horizons.

Keywords: Social reproduction crisis – collective subjects – new right – care – Social Work – ethical-political project.

¹ Lic. en Trabajo Social (UNMDP). Maestranda en Trabajo Social (UNICEN). Becaria Doctoral de CONICET. Investigadora en el Grupo de Investigaciones “Fundamentos, Formación y Trabajo” FCSYTS UNMDP. pamela.sveny@gmail.com

Introducción

Los años posteriores a la pandemia de COVID-19 han revelado una profunda crisis de reproducción social. Las redes familiares, comunitarias y estatales encargadas de sostener la vida cotidiana se encuentran tensionadas por la precarización laboral, la inflación, la fragmentación de las políticas sociales y el vaciamiento de las instituciones públicas. En este escenario, los cuidados —materiales, afectivos y comunitarios— se configuran como un terreno central de disputa política y económica (Fraser, 2023).

En Argentina, este proceso se intensifica con la llegada al poder del gobierno de La Libertad Avanza, expresión local del avance global de las nuevas derechas. Con un discurso antisistema y una impronta autoritaria, la gestión de Javier Milei combina un ajuste fiscal extremo con un incremento del control social y la represión estatal. Las medidas implementadas —recortes de programas alimentarios, eliminación de fondos educativos, despidos masivos y paralización de obras sociales— impactan de modo devastador sobre los sectores populares.

Las organizaciones territoriales, históricamente pilares de la reproducción comunitaria, atraviesan una etapa de asfixia material y simbólica: sin recursos, sin reconocimiento y bajo creciente vigilancia. A diferencia de otros momentos de crisis, donde las redes populares lograron articular gestión y politización, hoy se observa un vaciamiento del campo popular y una tendencia hacia la asistencialización de los sujetos colectivos: las organizaciones sostienen la vida, pero con escasa posibilidad de disputar sentidos o proyectar horizontes transformadores.

A partir de esta observación, el artículo analiza las tensiones entre acción asistencial y acción política en el contexto actual, explorando el lugar de los sujetos colectivos y los cuidados comunitarios en la Argentina, y situando el rol del Trabajo Social en la reconstrucción de horizontes emancipatorios.

Claves para caracterizar el gobierno de La Libertad Avanza

El gobierno encabezado por Javier Milei en Argentina puede situarse dentro del avance de las extremas derechas a nivel internacional, fenómeno que expresa no solo una reconfiguración del mapa político contemporáneo sino también nuevas formas de intervención estatal en el capitalismo actual. Esta administración ha operado bajo —por lo menos— dos ejes centrales: la implementación de un severo ajuste del gasto público y el despliegue de políticas represivas orientadas a garantizar la aplicación de estas medidas mediante el control social y la desactivación de la conflictividad.

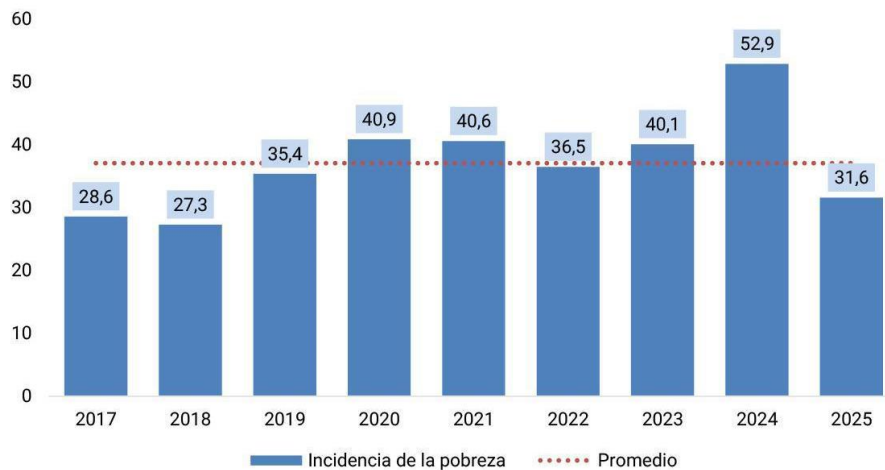
Con respecto al primer punto, el ajuste incluyó una fuerte devaluación, incrementos en tarifas de servicios públicos, despidos masivos y un reciente nuevo ciclo de endeudamiento externo, junto con la reducción de partidas presupuestarias destinadas a políticas sociales y de desarrollo comunitario. Estos ajustes se reflejan en indicadores concretos que, con sus limitaciones, explicitan la situación alarmante de los niveles de pobreza y desocupación que prevalecen en el país.

Según los datos del CEPA² en base a INDEC, la incidencia de la pobreza en el primer semestre de 2025 alcanzó al 31,6 % de la población, tras haber escalado al 52,9 % en 2024, el registro más alto desde 2002. Si bien el leve descenso posterior se explica en parte por

² Informe CEPA N° 524, ISSN 2796-7166.

una desaceleración inflacionaria y cierta recomposición parcial de los ingresos en sectores formales, la tendencia general muestra un deterioro estructural sostenido desde 2018, con un promedio del 37 % en los últimos ocho años. Este recorrido da cuenta de la profundización de la desigualdad y de la pérdida de capacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de reproducción social.

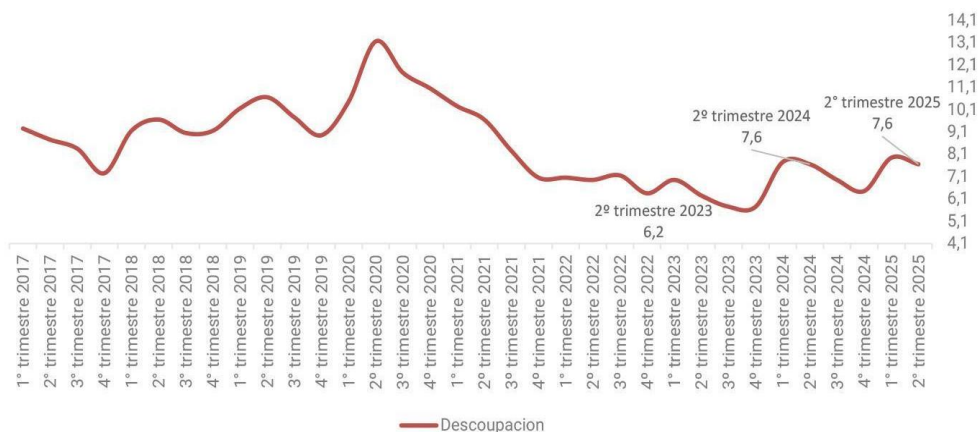
Gráfico 2: Evolución de la incidencia de la pobreza.
Período: 1º semestre 2017-2025.



Fuente: CEPA en base a INDEC.

Por su parte, la tasa de desocupación, que había descendido a 6,2 % en el segundo trimestre de 2023, volvió a situarse en 7,6 % hacia mediados de 2025, lo que revela un proceso de contracción del empleo vinculado al cierre de empresas, la caída del consumo interno y la retracción de la inversión pública. El mercado laboral se caracteriza, además, por una creciente informalidad y precarización, con una expansión del trabajo por cuenta propia y de los empleos de baja calificación y escasa protección social.

Gráfico 2. Tasa de desocupación.
Período: 1º trimestre 2017 a 2º trimestre 2025.



Fuente: CEPA en base a INDEC.

El análisis conjunto de ambos indicadores permite observar que la disminución del gasto público y la orientación “contractiva” de la política económica no generaron los efectos prometidos de estabilidad y crecimiento, sino un incremento de la vulnerabilidad social y de la precarización. En este sentido, las políticas de “sinceramiento fiscal” y desregulación

del Estado impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza consolidan una lógica de redistribución regresiva del ingreso, trasladando los costos del ajuste hacia los sectores populares y las clases trabajadoras.

Cabe señalar, sin embargo, que el vaciamiento general de la política social no fue total: el único programa que registró un incremento significativo fue la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo aumento se presentó como una medida de “protección a los más vulnerables”. No obstante, este tipo de intervención refuerza una matriz familiarista e individualizante de la política social, al centrar la transferencia en el núcleo doméstico y en la figura materna como garante de la reproducción cotidiana. Así, el Estado mantiene una presencia asistencial mínima, pero desligada de toda dimensión colectiva o de organización popular, desplazando el eje de la política social del derecho a la asistencia a la responsabilidad individual y familiar. Esta estrategia, lejos de contrarrestar los efectos del ajuste, tiende a consolidar un modelo de contención social despolitizado, funcional a la desmovilización y al control de la conflictividad.

El componente represivo del gobierno se manifestó en la criminalización de la protesta social y la estigmatización de los movimientos populares, particularmente los vinculados a la economía popular y a los espacios de asistencia barrial. La implementación del “protocolo antipiquetes” habilitó la intervención de fuerzas federales en manifestaciones, restringiendo el derecho a la protesta y generando un clima de disciplinamiento en los barrios. Este dispositivo se complementó con auditorías, quita de planes y sanciones sobre referentes comunitarios, reforzando la subordinación política y social.

En el mientras tanto del ajuste más grande de la historia, el gobierno impulsa un incremento significativo del presupuesto en materia de seguridad, configurando un Estado que se retrae en lo social pero se expande en lo coercitivo. Este crecimiento del gasto represivo, que asciende al 19% del presupuesto total —equivalente a \$2.977.000 millones, distribuidos entre la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, el Servicio Penitenciario y la Policía Federal Argentina—, expresa lo que Giaretto (2025) define como un proceso de relegitimación de las Fuerzas Armadas. Esta relegitimación no sólo implica una mejora en su capacidad operativa, sino también una revalorización simbólica y política de las instituciones armadas como garantes del orden y la gobernabilidad.

Bonnet (2024) observa que La Libertad Avanza combina posiciones neoliberales en materia económica y social con posturas conservadoras y autoritarias sobre derechos y libertades democráticas, articulando un tipo de gubernamentalidad que refuerza desigualdades, desmantela protecciones sociales y redefine los límites de lo posible en el plano político y ético. Por lo tanto, el ajuste fiscal y la represión convergen en un mismo proyecto: reducir la capacidad de organización y acción solidaria de los sujetos colectivos, especialmente de aquellos que sostienen la reproducción social en los barrios. La reducción de recursos destinados a comedores, ollas populares, huertas y cooperativas evidencia que el Estado no solo retira su apoyo material, sino que deslegitima las prácticas colectivas que habían emergido como respuestas comunitarias a la crisis.

Crisis de reproducción social y organización popular

El escenario argentino actual se inscribe en una profunda crisis de reproducción social, entendida como la fractura de las condiciones materiales, simbólicas y afectivas necesarias para sostener la vida cotidiana de las personas y las comunidades (Fraser, Arruzza & Bhattacharya, 2019). Esta crisis no se limita a la esfera económica o a la falta de ingresos:

también afecta la capacidad de cuidado, la sostenibilidad de la vida social y la reproducción de relaciones solidarias y de apoyo mutuo.

Desde una perspectiva crítica, la reproducción social refiere al conjunto de actividades, instituciones y relaciones que hacen posible la continuidad de la vida —el trabajo doméstico, el cuidado, las redes comunitarias, los servicios públicos— y que, sin embargo, han sido históricamente invisibilizadas y subordinadas dentro de la economía capitalista (Federici, 2010; Bhattacharya, 2017). En la medida en que el capital depende estructuralmente de ese trabajo no remunerado o socialmente desvalorizado, las crisis del capitalismo se expresan también como crisis de reproducción, es decir, como una tensión entre la acumulación económica y la sostenibilidad de la vida.

Fraser (2018) caracteriza este proceso como una contradicción constitutiva del capitalismo, donde la expansión del mercado tiende a socavar las bases que lo sostienen: el tiempo, la energía y los vínculos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo y la vida en común. En los ciclos de neoliberalización, esta contradicción se profundiza mediante la mercantilización del cuidado, la privatización de los servicios públicos y la externalización de los costos de la reproducción hacia las familias y las comunidades. La llamada “crisis de cuidados” no es, por tanto, un fenómeno sectorial o cultural, sino un síntoma de una reestructuración global del capital que reordena las jerarquías de género, clase y raza (Pérez Orozco, 2014).

En esta clave, la crisis de reproducción social puede leerse no sólo como un deterioro de las condiciones de vida, sino como una crisis política, en tanto redefine las formas de intervención estatal, los límites de la “ciudadanía social” y las posibilidades de acción colectiva. Las transformaciones actuales del capitalismo —en su fase financiera, digital y autoritaria— no sólo modifican las formas de producir valor, sino también las formas de sostener y gobernar la vida, reconfigurando las fronteras entre lo económico, lo social y lo político.

En el contexto post-pandemia, la precarización laboral, la inflación persistente y la fragmentación de los sistemas públicos de protección social han profundizado esta crisis. La mercantilización de la reproducción social traslada la responsabilidad de sostener la vida a los hogares, principalmente a mujeres y disidencias, quienes asumen cargas crecientes de trabajo doméstico y comunitario no remunerado.

El ajuste fiscal y los recortes de políticas sociales acentúan esta lógica: la reducción de programas de asistencia, la paralización de convenios con cooperativas y organizaciones populares, y la disminución de recursos para la economía social limitan la capacidad de los barrios para sostener ollas populares, comedores comunitarios y redes de cuidado. En este contexto, las organizaciones sociales, que históricamente funcionaron como amortiguadores de la crisis, enfrentan ahora un vaciamiento sin precedentes: muchas de las personas que sostenían estas estructuras deben insertarse en trabajos precarios para garantizar su subsistencia, erosionando el tejido comunitario.

A diferencia de crisis anteriores, como la de 2001 o los años post-pandemia de 2020, cuando la represión coexistía con políticas públicas de transferencia condicionada de ingresos que permitían cierto margen de acción colectiva, hoy los recursos estatales para sostener la vida colectiva son escasos o inexistentes. Este escenario configura una asistencialización de los sujetos colectivos: las organizaciones populares no desaparecen, pero su accionar se restringe a la gestión de la supervivencia inmediata, reduciendo su capacidad de disputar proyectos políticos o transformar estructuras sociales.

Desde una perspectiva feminista, esta dinámica implica una precarización de las prácticas de cuidado y de la vida social misma (Fraser, 2023). La sobrecarga de trabajo doméstico y comunitario, junto con la pérdida de reconocimiento político, constituye un desplazamiento de la acción colectiva hacia la mera administración de la pobreza, donde los cuidados se realizan bajo condiciones de desposesión material y simbólica.

Las experiencias territoriales —ollas populares, redes de apoyo, economías solidarias— constituyen prácticas políticas en sí mismas, capaces de disputar sentidos sobre lo común y cuestionar las lógicas mercantilizadas de la vida. Sin embargo, su potencial se ve limitado por la falta de recursos, la fragmentación del tejido social y la ausencia de interlocución estatal, lo que obliga a repensar las estrategias de intervención profesional del Trabajo Social y la articulación con los sujetos colectivos que aún persisten en los barrios.

Asistencialización de los sujetos colectivos: sostener la vida en condiciones adversas

La crisis de reproducción social y la asistencia precaria en los barrios populares configuran un escenario que obliga a revisar las categorías con las que analizamos las formas que asume la organización de la clase que vive del trabajo (Antunes, 2013). En este artículo, nos interesa recuperar la distinción entre sujeto colectivo y actor colectivo ya que resulta clave para comprender las transformaciones del campo popular contemporáneo.

En esta línea, puede comprenderse a los sujetos colectivos como agrupamientos capaces de inscribir sus demandas en el escenario social donde se expresan las disputas entre clases y fracciones de clase en relación con el Estado (Mamblona, 2012). Estas formas organizativas poseen cierta estabilidad en el tiempo y enfrentan cotidianamente las dinámicas de la vida social, ámbito en el que se reproduce el sentido común dominante que actúa, muchas veces de modo imperceptible, obstaculizando su transformación. En este marco, tanto las crisis como la posibilidad de afrontarlas mediante la lucha y la organización abren la posibilidad de una praxis política que permite a los sujetos colectivos reconocer las articulaciones y mediaciones entre las distintas esferas de la vida social, reconfigurando su modo de comprender la realidad. Desde esta perspectiva, emergen con mayor claridad las contradicciones estructurales del orden social vigente, habilitando una crítica al sistema que reproduce desigualdades y conflictos políticos y culturales. Así, las demandas locales pueden proyectarse hacia horizontes ético-políticos más amplios, incluso de alcance nacional o universal, donde las luchas materiales se articulan con dimensiones ideológicas y espirituales transformadoras (Oliver, 2017).

Por su parte, Mabel Manzanal (2017), retomando a Touraine (1995, 2005), diferencia actores y sujetos colectivos. Los actores colectivos intervienen en la escena social o en el territorio a partir de intereses definidos —organizaciones, instituciones públicas, grupos comunitarios— pero no necesariamente cuestionan ni transforman el orden establecido. Los sujetos, en cambio, ejercen libertad creadora, resisten las fuerzas que los subordinan y movilizan recursos, creencias y solidaridades para transformar el orden existente. Como señala Touraine (1995): “No hay sujeto si no es rebelde”: el sujeto emerge cuando se enfrenta a lo que amenaza su libertad y sentido de existencia.

El territorio se configura así como espacio donde conviven actores y sujetos, donde se producen relaciones de poder y se despliegan prácticas orientadas a la reproducción y transformación social. Mientras los actores pueden operar dentro de los márgenes de la dominación —gestionando, adaptándose o reproduciendo el orden—, los sujetos buscan subvertirlo, crear alternativas y proyectar horizontes emancipatorios.

En esa dinámica, resulta pertinente recuperar el aporte gramsciano en torno a la contrahegemonía para pensar el territorio como un campo de disputa donde coexisten procesos de dominación y de resistencia. Tal como plantea Gramsci (2011), la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino también por la producción de consenso y sentido común, lo que requiere que las clases subalternas desarrollen una “guerra de posición” orientada a confrontar el orden desde la sociedad civil (Coutinho, 1986; Thwaites Rey, 2007). En este marco, las prácticas territoriales orientadas a la construcción de poder popular pueden comprenderse como expresiones concretas de esa lucha contrahegemónica: espacios donde las organizaciones y sujetos colectivos elaboran respuestas que no solo buscan resolver necesidades inmediatas, sino también cuestionar las formas de dominación vigentes y anticipar, en el aquí y ahora, relaciones sociales alternativas. En esta clave, el poder popular contrahegemónico, entendido como proceso histórico y político, supone una praxis prefigurativa que integra la producción de conciencia crítica, la participación democrática y la articulación de redes comunitarias capaces de disputar el sentido de lo común y proyectar horizontes emancipatorios (Mazzeo y Stratta, 2007; Campione, 2007).

En el escenario argentino actual, marcado por el ajuste, la represión y la escasez de recursos, se observa una tendencia regresiva: subsisten actores colectivos, pero los sujetos colectivos se debilitan. Las organizaciones territoriales continúan operando —gestionando comedores, sosteniendo redes de cuidado o articulando respuestas a la emergencia—, pero la urgencia material, la ausencia de recursos y la pérdida de interlocución con el Estado limitan su capacidad de politización y transformación.

Como plantea Piva (2024), el ascenso de las derechas autoritarias en Argentina debe leerse como el resultado de un proceso prolongado de desmovilización obrera y popular iniciado hacia 2018, en el marco del estancamiento económico y el agotamiento del ciclo político pos-2001. Luego del pico de conflictividad de diciembre de 2017, caracterizado por la confluencia entre sindicatos y movimientos sociales contra la reforma previsional del gobierno de Cambiemos, se inicia una etapa de institucionalización del conflicto, que canaliza las expectativas de cambio hacia la vía electoral del Frente de Todos. Esta dinámica produjo una reabsorción estatal de la protesta y una caída sostenida de la movilización callejera, en paralelo al deterioro del salario real y al aumento de la informalidad laboral.

En términos estructurales, la prolongación de la crisis y la fragmentación de la clase trabajadora —entre formales, informales y desocupados— erosionaron las capacidades colectivas de acción y favorecieron un proceso de individualización social, en sintonía con las formas neoliberales de dominación que Piva (2020) caracteriza como “coerción del mercado”. En este contexto, la desagregación de la experiencia popular y la ausencia de alternativas políticas comunes abrieron paso a una demanda de orden que reconfiguró el imaginario político de amplios sectores subalternos. La desmovilización previa, por tanto, constituye el terreno sobre el cual se asienta la actual ofensiva autoritaria, al debilitar los lazos sociales y las formas de organización que históricamente habían articulado la defensa de los intereses populares.

Este proceso de debilitamiento puede pensarse en continuidad con la asistencialización de los sujetos colectivos: los actores que permanecen gestionan la vida, pero encuentran crecientes obstáculos para transformarla. Allí donde antes emergían sujetos capaces de construir proyectos emancipatorios y disputar sentidos, hoy persisten actores sobrecargados, fragmentados y desprovistos de reconocimiento político.

La idea de asistencialización de los sujetos colectivos permite nombrar un fenómeno reciente en el campo de las prácticas comunitarias: el desplazamiento de las organizaciones populares desde un lugar de producción política y de disputa por derechos hacia un rol cada vez más orientado a gestionar la supervivencia inmediata. Este proceso no surge de la pasividad de los movimientos, sino del agotamiento material y simbólico provocado por políticas de ajuste, vaciamiento de programas sociales y reconfiguración del vínculo entre Estado, mercado y sociedad civil.

En los barrios populares de Argentina, ollas populares, comedores comunitarios, merenderos y huertas se sostienen principalmente gracias al trabajo de mujeres y disidencias que articulan solidaridad y cuidado frente a la falta de políticas públicas. Sin embargo, la ausencia de recursos estatales ha transformado estas prácticas en acciones de mera contención, donde la emergencia material limita la capacidad de disputar sentidos o desarrollar proyectos emancipatorios. La paradoja es que, aunque las redes comunitarias continúan sosteniendo la vida, lo hacen en condiciones de sobreexplotación, invisibilización y precariedad, reproduciendo involuntariamente la lógica de la desposesión impuesta por el neoliberalismo autoritario.

Estudios recientes muestran que este proceso tiene un marco regional y estructural. Fraser (2023) subraya que la acumulación capitalista depende históricamente de un trabajo de cuidado feminizante e invisibilizado, cuya crisis permanente constituye una de las contradicciones centrales del capitalismo contemporáneo. Autoras latinoamericanas como Grassi (2018) y Rozas Pagaza (2020) señalan que las políticas focalizadas y los programas de transferencia condicionada de ingresos promovieron previamente una “feminización de la asistencia”, delegando en movimientos y redes comunitarias la gestión de la pobreza bajo criterios de eficiencia y corresponsabilidad. Lo que observamos hoy en Argentina representa una *fase más extrema de esta dinámica*, donde ni siquiera existe mediación estatal: las organizaciones sostienen tareas de cuidado y alimentación sin autonomía económica ni capacidad de incidencia política.

Para analizar esta situación, abundan los ejemplos. Según el Informe del Observatorio de Barrios (2024), en la Villa 31 (Ciudad de Buenos Aires) los comedores comunitarios reportaron que durante 2024 la interrupción de transferencias de alimentos secos y donaciones estatales redujo en 50% la cantidad de comidas diarias. También, en la Provincia de Buenos Aires, cooperativas de economía popular dependientes de convenios con el Ministerio de Desarrollo Social dejaron de recibir fondos durante el primer semestre de 2024, afectando la continuidad de proyectos de huertas comunitarias y talleres productivos (Cooperativa La Unión, 2024). Otro ejemplo se ubica en el Gran Córdoba, redes de promotoras de salud y género denunciaron que la suspensión de programas estatales obligó a reducir visitas domiciliarias y talleres comunitarios, concentrando la acción en distribución de alimentos y artículos de primera necesidad (Informe Red de Cuidado Córdoba, 2024). En Mar del Plata, el recorte en recursos alimentarios ha sido casi total, tanto por parte del nivel nacional, como del provincial y municipal, afectando comedores comunitarios, merenderos y espacios de asistencia territorial. En este contexto, el acceso a alimentos u otros recursos depende, en gran medida, de las negociaciones particulares que logre sostener cada organización con los distintos niveles del Estado. Esta dinámica reproduce un esquema de asistencia selectiva y clientelar, donde la posibilidad de obtener recursos no responde a criterios universales o de derecho, sino a la capacidad de gestión y de vínculo político de cada colectivo.

La asistencialización implica un desplazamiento de lo político hacia lo operativo: las organizaciones continúan actuando, pero su horizonte transformador se diluye. La vida cotidiana se convierte en territorio de resistencia material, pero la posibilidad de disputar significados y generar transformación social estructural se reduce.

Desde la perspectiva del Trabajo Social, esta situación plantea un desafío ético y epistemológico: acompañar procesos organizativos que sostienen la vida sin reforzar la lógica de la asistencia despolitizada, recuperando la dimensión transformadora de los vínculos comunitarios. La tarea profesional requiere reconocer que el cuidado no es neutro: constituye una práctica política capaz de interpelar las lógicas mercantilizadas y patriarcales presentes en las políticas públicas, y un espacio de producción de conocimiento situado sobre la organización comunitaria y la justicia social.

Trabajo Social y proyecto ético-político en contextos de crisis de reproducción social

El Trabajo Social se enfrenta hoy a un escenario marcado por la profunda crisis de reproducción social, la desarticulación de políticas públicas y la ofensiva de gobiernos de extrema derecha, como el de La Libertad Avanza en Argentina. Esta coyuntura evidencia la interdependencia entre precariedad material, sobrecarga de cuidados y debilitamiento de las organizaciones comunitarias, lo que plantea desafíos ético-políticos inéditos para la profesión.

Marilda Iamamoto (2008) señala que los valores que fundamentan el ejercicio profesional —libertad, igualdad, reciprocidad y justicia social— deben historicizarse en los cuadros macroscópicos de la sociedad actual. En la práctica, esto implica reconocer que la igualdad formal y la libertad proclamadas en el plano jurídico no siempre se traducen en igualdad y libertad reales en la vida cotidiana, especialmente en contextos donde las políticas sociales han sido vaciadas y la pobreza y precariedad se profundizan.

Desde esta perspectiva, el Trabajo Social debe articular la defensa de derechos humanos con la construcción de nuevas prácticas colectivas, que no se limiten a la gestión de la emergencia sino que recuperen la dimensión política de los cuidados. En otras palabras, la intervención profesional requiere contribuir a la reconstitución de sujetos colectivos, fortaleciendo la capacidad de los actores sociales para disputar sentidos, proyectar horizontes emancipatorios y resistir las formas de subordinación impuestas por la mercantilización de la vida.

En este marco, el Trabajo Social debe confrontar la asistencialización de los sujetos colectivos: la profesión no puede limitarse a apoyar actores que gestionan la emergencia, sino que debe intervenir críticamente para reconstruir la dimensión política de lo colectivo. Esto implica: identificar y fortalecer prácticas de cuidado que trasciendan la urgencia material, revalorizando su potencial político; reconocer los márgenes de libertad y creatividad que aún persisten en los actores colectivos, fomentando la transición de actores a sujetos colectivos; participar en la construcción de propuestas de políticas sociales que reconozcan y amplíen la capacidad de agencia de los sectores populares, evitando reproducir lógicas de dependencia y fragmentación.

Tal como recuerda Iamamoto, la praxis profesional no es neutra: intervenir implica situarse en las disputas por lo común, por la vida digna y por una democracia real, donde los derechos no sean solo formales sino efectivamente garantizados. La defensa de la igualdad, la libertad y la justicia social pasa por acompañar la organización popular, la producción de conocimiento situado y la construcción de proyectos colectivos emancipatorios.

Si bien el panorama actual muestra un fuerte proceso de desmovilización y asistencialización de los sujetos colectivos, esta no constituye una situación definitiva. Siguiendo a Gramsci (2011), toda crisis abre la posibilidad de una recomposición de las fuerzas sociales y de una nueva disputa por la hegemonía. En los intersticios de la precariedad, las organizaciones continúan creando espacios de encuentro, solidaridad y formación política que, aunque fragmentarios, prefiguran alternativas al orden dominante. Es en esos gestos cotidianos —en una olla que se sostiene, en una red de cuidado que no se quiebra, en una asamblea que vuelve a reunirse— donde puede vislumbrarse la potencia latente de los sujetos colectivos y la posibilidad de revertir la tendencia a su asistencialización. Recuperar esa dimensión creadora de lo popular es una tarea estratégica para el Trabajo Social y para las ciencias sociales críticas: acompañar, visibilizar y fortalecer esas resistencias que, aún en condiciones adversas, sostienen la vida y abren caminos hacia nuevas formas de lo común.

Conclusiones

El análisis desarrollado a lo largo del artículo permite identificar un conjunto de transformaciones estructurales que atraviesan el presente. La primera de ellas es la reconfiguración del Estado, que bajo la gestión de La Libertad Avanza profundiza la lógica neoliberal de los gobiernos anteriores, desplazando la responsabilidad de la reproducción social hacia el mercado y las organizaciones comunitarias.

La segunda es la mutación del campo popular, que transita de la constitución de sujetos colectivos capaces de disputar proyectos de sociedad a la persistencia de actores colectivos centrados en la gestión de la urgencia. Esta transición —conceptualizada aquí como *asistencialización de los sujetos colectivos*— expresa el impacto combinado del ajuste económico, la precarización del trabajo y la pérdida de articulaciones políticas amplias.

En tercer lugar, se observa una tensión entre cuidado y politización. Las prácticas de cuidado, sostenidas mayormente por mujeres en los territorios, son esenciales para la reproducción de la vida, pero en el contexto actual se ven despojadas de su potencia transformadora. Recuperar su dimensión política es, por tanto, una tarea central para el Trabajo Social.

Finalmente, el artículo sostiene que el proyecto ético-político del Trabajo Social, tal como plantea Lamamato, debe traducirse en acciones concretas que contribuyan a la democratización de la vida social, a la defensa de los derechos y a la construcción de una nueva hegemonía basada en la solidaridad y la justicia.

En un tiempo donde el Estado se retira y las derechas avanzan, el desafío profesional radica en acompañar, fortalecer y recrear las formas colectivas de sostener la vida, articulando el saber técnico con el compromiso político. Hacer Trabajo Social, hoy, es también disputar el sentido mismo de lo social.

Bibliografía

- Antunes, R. (2013) Los sentidos del trabajo: ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo. 2da Edición. Buenos Aires. Herramienta.
- Arruzza, C., Bhattacharya, T., & Fraser, N. (2019). Feminismo para os 99%: um manifesto. Boitempo editorial.
- Bhattacharya, T. (Ed.). (2017). Social reproduction theory: Remapping class, recentring oppression. Pluto Books.

- Bonnet, A. (2024). El ascenso de Milei en Argentina y las nuevas extremas derechas de América Latina. *Papel Político*, 29.
- Campione, D. (2007). *Para leer a Gramsci*. Ediciones del CCC.
- Cooperativa La Unión. (2024). Informe sobre la interrupción de convenios de economía popular en la Provincia de Buenos Aires. Inédito.
- Coutinho, C. N. (1986). *Introducción a Gramsci*. Ediciones Era.
- Danani, C. (2012). Las políticas sociales en la Argentina contemporánea: entre la integración y la asistencia. En A. Grassi (Comp.), *Política social y economía social en la Argentina posneoliberal* (pp. 21–45). Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Federici, S. (2010). Mujeres, luchas por la tierra y reconstrucción de los bienes comunales. *Veredas, Revista del Pensamiento Sociológico*, (21), 81-106.
- Fraser, N. (2018). Neoliberalismo y crisis de reproducción social. *ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social*, 2(3), 215-225.
- Fraser, N. (2023). *Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso*. Siglo XXI editores.
- Giaretto, Mariana. (2025). “La política represiva de la ultraderecha en Argentina. Criminalización de luchas indígenas en la Norpatagonia.” En Artese, M. (Comp.) *Lumpen libertarios. Nueve reflexiones en torno a la derecha radical en el poder*. Buenos Aires: Ed. UNLU. (En prensa).
- Gramsci, A. (2011). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Nueva Visión.
- Grassi, E. (2018). *Políticas sociales: el tiempo de la vida y el trabajo de cuidado*. Miño y Dávila.
- Hintze, S. (2019). Las políticas sociales en la encrucijada: entre la protección y el control. En G. Kessler (Comp.), *La sociedad argentina hoy: radiografía de una nueva estructura social* (pp. 215–238). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Iamamoto, M. V. (2008). *Servicio social en la contemporaneidad: trabajo y formación profesional*. Cortez Editora.
- Informe del Observatorio de Barrios. (2024). *Impacto del ajuste en los comedores comunitarios de la Villa 31*. Universidad de Buenos Aires.
- Informe Red de Cuidado Córdoba. (2024). *Efectos del ajuste en las redes comunitarias de salud y género en Córdoba*. Inédito.
- Mamblona, C. (2019). Sujetxs colectivxs, procesos organizativos: implicancias y particularidad para el Trabajo Social. En Mamblona, C. y Matusevicius, J. *Luchas sociales, sujetos colectivos y Trabajo Social en América Latina*. Lugar: Tandil. Editorial: Puka.
- Manzanal, M. (2007). *Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva crítica sobre la producción del territorio*. M. Manzanal, M. Arzeno y B. Nussbaumer (comps.), *Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto*, Buenos Aires, Ed. CICCUS, 15-50.
- Mazzeo, M., & Stratta, F. (2007). Introducción. En VV.AA., *Reflexiones sobre poder popular* (pp. 7–13). Editorial El Colectivo.
- Oliver, L. (2017) “Gramsci y la noción de catarsis histórica. Su actualidad para América Latina”. En *Revista Las Torres de Lucca: revista internacional de filosofía política*. Año 2017, Vol. 6, Número 11 (July-December). Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: <http://www.latorres-delucca.org/index.php/ojs/issue/view/14>
- Orozco, A. P. (2014). Del trabajo doméstico al trabajo de cuidados. Con voz propia La economía feminista como apuesta teórica y política, Madrid, *La oveja roja*, 49-73.

- Piva, A. (2020). Una lectura política de la internacionalización del capital. Algunas hipótesis sobre la actual fase de la internacionalización del capital y el Estado nacional de competencia.
- Piva, Adrián. (2024). Milei, desmovilización popular y avance autoritario. En Jacobin, Armas de la crítica, 10-12-2024. Consultado en: <https://jacobinlat.com/2024/12/milei-desmovilizacion-popular-y-avance-autoritario/>
- Pagaza, M. E. R. (2012). Algunas reflexiones sobre las tensiones de la protección social en el siglo XXI. Revista de Políticas Públicas, 111-118.
- Rozas Pagaza, C. (2020). Cuidado, género y políticas sociales en América Latina: tensiones y desafíos. CLACSO.
- Thwaites Rey, M. (2007). El Estado “ampliado” en el pensamiento gramsciano. En M. Thwaites Rey (Comp.), Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates (pp. 131–156). Prometeo Libros.
- Touraine, A. (2005). Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy. Paidós, Estado y Sociedad 135, Buenos Aires.
- Touraine, A. (1995). Crítica de la modernidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.